

## MINUTA LEGISLATIVA

¿En qué está la educación cívica en Chile? Para hacer un poco de historia, debemos remontarnos al 1912, año en que se establece esta asignatura en el curriculum escolar para los cursos de 5to y 6to de Humanidades, con dos horas semanales.

Es en 1955, en que el Plan de Estudios de Humanidades mantiene las dos horas de la asignatura de Educación Cívica para dichos cursos, y además, incorpora el 'Consejo de Curso' como una instancia para que los estudiantes puedan experimentar en menor escala las características y complejidades que supone elegir a las autoridades y administrar un gobierno.

En 1967, y bajo el contexto de la Reforma de la Enseñanza Media, el gobierno de ese entonces elimina la Educación Cívica como asignatura independiente y decide incorporarla como introducción a la Economía y a la Ciencia Política, integrándola en la asignatura de Ciencias Sociales. Dicha reformulación del plan curricular, consideró incorporar otros objetivos de la Educación Cívica en otras asignaturas como Castellano, Filosofía, Matemáticas y Ciencias Naturales, además de impulsar la creación de los 'Centros de Alumnos'.

No es hasta 1980, en el que se reformula el Plan de Estudios, restableciendo la educación cívica como asignatura independiente, bajo el nombre de 'Educación Cívica y Economía', impartándose para los cursos de 1ero y 2do año medio, con tres horas semanales. Dicha asignatura tenía como principal objetivo impartir conocimientos respecto de la nueva Constitución Política, el funcionamiento del sistema político y económico, y los derechos fundamentales. Sin embargo, en 1984 se procede a realizar una modificación, en la que en 3er año medio se imparte el ramo de Educación Cívica y en 4to año medio la de Economía; ambas con dos horas semanales.

Posteriormente, en 1998, nuevamente desaparece la asignatura de 'Educación Cívica', procediendo a incorporarse el concepto de 'Formación Ciudadana' a lo largo de todo el curriculum escolar: Esta nueva fórmula comienza a aplicarse a estudiantes desde 1er año medio e incluye no sólo conocimientos, sino también habilidades de manejo de la información, habilidades de pensamiento como la reflexión crítica, la capacidad de formular opiniones y actitudes concordantes con un régimen democrático, como el pluralismo, el respeto por el otro, y la valoración y respeto por los derechos humanos.

Como se puede apreciar en el recorrido por la historia de esta importante asignatura, durante las primeras décadas, el foco estuvo centrado principalmente en las formas de gobierno, la democracia, los poderes del Estado, la participación ciudadana y la Constitución Política de la República. Posteriormente, se avanzó hacia la promoción de habilidades y actitudes ciudadanas, desarrollando un



enfoque más amplio buscando promover la participación cívica informada, crítica y constructiva.

Más recientemente, en abril del año 2016, se publica la Ley N° 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, estableciendo la obligación por parte de las instituciones educacionales, de tener planes de formación ciudadana en los niveles de educación parvularia, básica y media; buscando proporcionar a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. En el caso de la educación parvularia, la ley establece que dicho plan deberá ejecutarse de acuerdo a las características particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego.

No obstante, la implementación de esta política no ha rendido los frutos esperados y argumentados durante la tramitación de la ley. Se ha registrado por parte de los educadores, que ha faltado acompañamiento técnico por parte de la autoridad, reportándose a su vez problemas de índole ideológicos en cuanto al contenido elaborado por los establecimientos educacionales. Así mismo, la pandemia y la falta de participación de la comunidad educativa en la planificación del Plan de Mejoramiento Educativo (PME), el cual busca ser la herramienta central de planificación para la evaluación del mejoramiento en las escuelas, han sido elementos que han ocasionado contratiempos en los objetivos que se buscan cumplir mediante el Plan de Formación Ciudadana.

Lo anteriormente expuesto fue confirmado mediante el estudio impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desarrollado en el año 2018, y el cual evidenció una serie de problemas existentes en la implementación de la ley. Dentro de las principales conclusiones que arroja dicho trabajo, se encuentran la falta de compromiso real con la importancia que ostenta la educación cívica y la formación ciudadana, ejecutando planes curriculares por parte de las escuelas con el mero fin de dar cumplimiento legal a la normativa.

Buscando revertir esta situación, debido a la importancia que posee la educación cívica para el fortalecimiento de la democracia y el bienestar general de la nación, es que el Senador Velásquez y la Senadora Sepúlveda, han ingresado un proyecto de ley (boletín N° 15.524-04) que mediante un artículo único busca agregar un nuevo inciso final al artículo 31 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, General de Educación, y que tiene por objetivo incluir en la malla curricular la asignatura de Educación Cívica y Formación Ciudadana en la enseñanza básica y media, buscando que mediante su carácter de obligatorio, se promueva la entrega de ciertos conocimientos como el funcionamiento de la democracia, el estado de derecho, las

instituciones del Estado, los derechos humanos, la diversidad cultural, la participación ciudadana, además de habilidades sociales y la resolución de conflictos.





## MINUTA LEGISLATIVA

El 14 de agosto de 1990, Chile ratifica la suscripción a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, reconociendo así la necesidad de una atención y protección mayor por parte del Estado, los menores de dieciocho años de edad.

Esta Convención, significó un cambio de paradigma para dicha época, en donde a partir de dicho tratado, los niños y niñas dejarían de considerarse propiedad de sus padres, ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad, sino más bien, de seres humanos y titulares de sus propios derechos.

La instancia, establece que los Estados Partes deben promover y asegurar que todos los niños y niñas se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia, garantizando el acceso a la educación y salud de los mismos, buscando además desarrollar en pleno su personalidad, habilidades y talentos. Del mismo modo, se busca que los menores puedan crecer en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, recibiendo la información en la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa.

Este espacio internacional, busca articular una serie de derechos en función de los niños y niñas, sobre la base de cuatro principios fundamentales: la no discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el respeto por la opinión de los niños y niñas.

En ese sentido, nuestro país ha dado cumplimiento a esa materia, adoptando a través de instancias legislativas la efectividad de estos principios, y garantizando el acceso a la educación y salud, así como el derecho de los niños al descanso, el esparcimiento, al juego y las actividades recreativas, culturales y artísticas.

De igual modo, en la protección de la integridad de los menores, se ha avanzado en una serie de medidas que dicen relación con la incorporación de nuevos delitos de maltrato a estos, mediante la modificación del Código Penal, buscando avanzar en entregar mayores garantías en su indemnidad, intimidad e integridad personal.

A nivel institucional, en enero de 2018 es publicada la Ley Nº 21.067, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que tiene por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de los cuales son titulares los niños, de acuerdo a la Constitución Política de la República, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados por nuestro país, así como a la legislación nacional, velando siempre por su interés superior.

De igual forma, la Ley Nº 21.430, sobre las garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, publicada en marzo del presente año, y que tiene por objeto la garantía y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, creando el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, viene a



afianzar lo expuesto anteriormente y da cuenta del compromiso del Estado de Chile con la promoción y protección de los menores.

Sin embargo, debido a los hechos actuales que enfrenta nuestro país en materia de delincuencia, el Congreso también debe hacerse parte en relación a actualizar la normativa vigente a fin de poder entregar protección a los menores frente a este tipo de actos que ponen incluso en riesgo la vida de los mismos.

El crimen organizado se apodera a diario de espacios públicos en los que concurren niños y niñas de forma habitual, generando un riesgo en la integridad física y psíquica de estos.

Sin ir más lejos, a comienzos de este mes se registró una situación sumamente delicada: Se reportó una balacera en la comuna de la Florida, en la región Metropolitana, en la que mientras se desarrollaba un partido de fútbol -a plena luz del día- en una plaza de barrio, desconocidos habrían procedido a disparar contra los presentes. El resultado: Los antisociales dieron muerte a cuatro personas, y otras resultaron con riesgo vital. Una de las víctimas fatales falleció instantáneamente en el lugar tras recibir entre 17 y 19 impactos balísticos. En el lugar se encontraban menores de edad.

Lamentablemente, estas situaciones están dejando de ser aisladas y se están volviendo cada vez más comunes. Otro ejemplo de aquello, es lo ocurrido en la comuna de Puente Alto durante el mes pasado, en donde un grupo de antisociales se enfrentaron a balazos en las inmediaciones del Jardín Infantil 'El Almendral', y en donde registros audiovisuales dan cuenta de cómo las educadoras y los niños presentes deben refugiarse para no ser alcanzados por los proyectiles.

Estas dolorosas situaciones que afectan a las familias chilenas, se encuentran vulnerando la integridad de los menores, y por tanto es un tema a abordar, buscando que la legislación penal considere mayores sanciones en los casos en que la comisión de los delitos se perpetre en lugares en donde concurren de manera habitual niños, niñas y adolescentes, ya sea con fines educacionales, buscando algún tipo de asistencia en el área de la salud, recreacional u ocio; persiguiendo de esta manera disuadir la conducta de este tipo de personas que cometen delitos y así prevenir situaciones que puedan resultar en consecuencias fatales.

Por lo anterior es que el Senador Kusanovic, la Senadora Rincón y los Senadores Moreira, Ossandón y Van Rysselberghe, se encuentran impulsando una iniciativa de ley (boletín Nº 15.492-07), que busca modificar el Código Penal, para establecer como circunstancia agravante el hecho de cometer un delito en espacios públicos en donde habitualmente asisten niños, niñas y adolescentes.

El proyecto de ley propuesto por los parlamentarios, se compone por un artículo único que pretende modificar el numeral 18 del artículo 12 del Código Penal, el cual actualmente solo establece, como circunstancia agravante, "cometer delito en lugar destinado al ejercicio de un culto permitido en la República", incorporando en

esta propuesta otros lugares como salas cunas, jardines infantiles o guarderías; establecimientos educativos, plazas de juegos, bibliotecas, centros de atención de salud, recintos deportivos, espacios culturales, u otros de carácter análogo.



